

Concertación a palos: política económica y conflictividad gremial en la Presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962)

Concertation the hard way: Economic Policy and Union Conflict in the Presidency of Arturo Frondizi (1958-1962)

Aníbal Pablo Jáureguiⁱ

Resumen: En el presente trabajo analizamos las dificultades que la propuesta de desarrollo económico de Frondizi encontró en el terreno político-gremial, profundamente movilizado por la Revolución Libertadora. Su aspiración a incorporar a los trabajadores y empresarios a los mecanismos de negociación tripartita propio del capitalismo de posguerra (que se correspondía con su propuesta de Frente Nacional), halló una fuerte resistencia sindical y militar. Aunque atravesada por violencia y represión, su política laboral consiguió imponer mecanismos de negociación con los sindicatos que permitieron encaminar su programa económico.

Palabras clave: Desarrollismo; Sindicalismo; Conflictividad Social.

Abstract: In this article we analyze the difficulties that Frondizi's economic development proposal encountered in the political-labour union field, deeply mobilized by the Revolución Libertadora. His aspiration to incorporate workers and businessmen into tripartite negotiation mechanisms typical of post-war capitalism (which corresponded to his National Front proposal) encountered strong trade union and military resistance. Although crossed by violence and repression, his labor policy managed to impose negotiation mechanisms with the labour unions that allowed directing his economic program.

Key words: Developmentalism; Trade unionism; Social conflict.

Recibido: 18 de agosto de 2022

Aprobado: 14 de septiembre de 2022

ⁱ Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. ORCID 0000-0002-1935-2095. jaureguiianibal37@gmail.com

Introducción

El período presidencial de Arturo Frondizi representa un momento destacable en la evolución de la economía argentina, si consideramos los cambios que se produjeron entonces en la estructura productiva. Estos acaecieron en medio de una agudización de conflictos sociales con afectación directa sobre el mundo del trabajo, que se agudizaron durante el régimen militar de la “Revolución Libertadora”. Su resolución era requisito primordial para que el programa de desarrollo se pusiera en marcha.

Un aspecto esencial reside en la singular condición de las instituciones políticas de la época. Existe un consenso en definirla como una semi-democracia con predominio del pretorianismo de masas, entendido este como un sistema de “creciente cantidad de actores en la escena política, anudados por conflictos escasamente regulados por marcos institucionales y normativos” (O'Donnell, 1982, p. 48). A pesar de su origen discutible, el nuevo mandatario llegaba al poder cargado de expectativas por el eventual retorno a la Constitución y la perspectiva de retorno. No obstante, la forma en que había alcanzado la Presidencia —como una concesión de las Fuerzas Armadas y del peronismo— lo dejaba con un margen limitado de acción. La degradación institucional determinaba que la negociación con los “factores de poder” definiera el proceso decisorio.

La propuesta que presentó Frondizi en su campaña no se correspondía con el “desarrollismo” como fue conocido con posterioridad. Su programa consistía en una versión radical intransigente de lo nacional y popular. Munido de una versión embrionaria de la “teoría del intercambio desigual”, su ideario entroncaba con la “Economía del Desarrollo” de la Segunda Postguerra que, en América Latina, abrigaba como propósito esencial el fortalecimiento del aparato industrial. La versión olímpica de la industrialización la imaginaba como una epopeya nacional de ruptura con el atraso, en una renovación del viejo ideal del “progreso” argentino adaptado a los “años dorados” del capitalismo de postguerra. De ahí se desprendía un nuevo contrato que Frondizi le proponía a la sociedad y que adoptaba como modo de articulación entre sociedad y Estado la negociación tripartita con empresarios y trabajadores. Ella proveía de raíces sociales al proyecto nacional, sostenido en la modernización y en la innovación tecnológica. Frondizi consideraba que el gobierno debía seleccionar a través de distintos mecanismos el destino de la inversión privada, aunque desconfiaba en la eficiencia del aparato estatal para poner en ejecución las medidas propuestas, desconfianza que se explica por las deficiencias burocráticas heredadas (Sikkink, 2009). Si parecía desechar en principio los automatismos del mercado como motores del desarrollo, contaba con el proteccionismo de mercado interno como la forma idónea de establecer los precios relativos favorables a la inversión privada. Si aspiraba a la reducción del gasto público, enfatizaba la necesidad de que el Estado promoviera enérgicamente las actividades productivas.

Este programa de gobierno debía ser sostenido por un “Frente Nacional” del que los trabajadores y los empresarios serían pilares, una alianza de las clases para enfrentar a la “oligarquía”, concepto deliberadamente difuso que identificaba tanto a los defensores de la tradicional economía agroimportadora —entendida como la alianza entre los exportadores primarios y los defensores de la importación de energía y bienes industriales sustituibles— como a sectores de la administración pública. La política de coalición estaba resumida en el

concepto de “integración”, su inicial lema definitorio, ya que el conflicto social había sido la causa principal del supuesto estancamiento económico que vivía el país desde 1949.¹ Las herramientas fundamentales para destrabar los enfrentamientos consistían, según Frondizi, en la reposición de las normas en el ámbito productivo, en la disciplina laboral y en la distribución de los costos y beneficios del futuro crecimiento. Para ello se requería la entrega de los sindicatos a los dirigentes más representativos de los trabajadores, que eran los peronistas. Esto era imprescindible para un mundo gremial que se había visto profundamente alterado por el intento de la Revolución Libertadora de desperonizar a los trabajadores y de lograr una baja del salario que favoreciera el proceso de acumulación empresaria (aunque obtuvo lo contrario). Instrumento clave para alcanzar este propósito sería entonces la sanción de ley de asociaciones profesionales que normalizara la vida sindical. Ciertamente el gobierno no sería neutral en esa normalización. Procuraría la afirmación del sindicalismo peronista frente a las corrientes que discutían su liderazgo permitiendo no sólo hacer honor a su promesa de campaña sino también aspirar a que la dirigencia peronista actuara *responsablemente* en la recuperación de la disciplina laboral para facilitar la inversión de los empresarios nacionales y del capital extranjero. El gobierno intentó convencer a los empresarios, sobre todo a los que se nuclearon en Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), de que aceptaran el retorno de la dirigencia peronista a la cabeza de sus organizaciones como garantía de normalidad laboral.² En una primera etapa Frondizi buscó implementar una política gubernamental de acuerdo con las principales corporaciones, negociando e incluso concertando las políticas fundamentales, adoptando criterios heterodoxos en la política económica. Pero ante el incremento de la inestabilidad macroeconómica y la puesta en marcha del Plan de Estabilización Económica, los sindicatos se radicalizaron, a lo que el gobierno respondió con medidas duras represivas. A partir de ahí hubo negociaciones e incluso intentos de concertación, pero a “palos”.

El problema de la conflictividad laboral bajo el gobierno de Frondizi ha sido abordado por la literatura en primer lugar como un capítulo de la denominada “resistencia peronista”, es decir la etapa en la que los trabajadores peronistas y sus organizaciones defienden las conquistas obtenidas bajo el gobierno derrocado en 1955 (Basualdo, 2010). Otro abordaje proviene de la pluma de James (1990, 2007) que piensa las relaciones de los trabajadores con empresarios y Estado en clave de la cultura laboral que se forjó en los años anteriores, más allá de la defensa del salario y de las organizaciones. Otra mirada la provee Cavarozzi (1979, 1984) que interpreta los años de Frondizi como el origen de una fórmula política argentina que duraría hasta la década siguiente y que provee los fundamentos de la etapa de acumulación de los sesenta.

La tesis que intentaremos demostrar aquí afirma que el programa de desarrollo nacional del frondizismo incluía como un aspecto central la institucionalización de la negociación corporativa, consistente con su propuesta de integración. La consolidación de la negociación laboral representaba un avance significativo para los sindicatos, aunque su dinámica fue alterada por la implementación del programa de estabilización y por las presiones militares. No obstante, el objetivo de integración de los trabajadores nunca fue abandonado

¹ Este concepto de integración también tenía una connotación geográfica regional.

² La Confederación General Económica, cuyo funcionamiento fue autorizado por el nuevo gobierno, guardaba una actitud mucho más favorable hacia el peronismo, aunque recelaba del sindicalismo, como pudo advertirse en ocasión de la reunión del Congreso de la Productividad de 1955.

por el gobierno, aunque las formas efectivas de esa integración quedaban sujetas a las presiones cruzadas de la economía y la política.

En esta presentación queremos tratar el problema descomponiéndolo en sus variables cronológicas; en un primer apartado abordaremos la formulación que hizo Frondizi de las relaciones con el sindicalismo, durante la campaña electoral que lo llevaría a la presidencia. En segundo lugar, analizaremos el curso de ese vínculo en los primeros años de su presidencia, marcados por una profunda inestabilidad. El tercer apartado está destinado a estudiar la configuración de un sistema de acuerdos tácitos que acompañó al Plan de Estabilización lanzado en 1958. Por último, veremos la desestructuración de este sistema y el proceso que derivó en el golpe de marzo de 1962.

Las luchas sociales bajo la Revolución Libertadora y la campaña presidencial

Aunque todo inicio es arbitrario, situamos el comienzo de nuestra historia en noviembre de 1955 cuando, derrocado Perón, Frondizi esbozaba su acercamiento a los trabajadores y al electorado peronista. De a poco y a su manera, se propuso una renovación del proyecto nacional y popular que el peronismo había expresado, con la singularidad de que se haría con su exclusión política pero no social. Contra la tradición partidaria radical, Frondizi defendió la preservación de las organizaciones gremiales tal como se habían constituido en la década anterior, aunque proclamó su independencia en relación al Estado y los partidos políticos. También llamó a salvaguardar las conquistas sociales alcanzadas bajo el gobierno derrocado.³

Como se sabe, la tentativa de la Revolución Libertadora de transformar de cuajo la economía y de reducir el costo salarial debilitando a los sindicatos fue frustrada por la resistencia peronista. La lucha de los trabajadores por defender sus organizaciones, unida a la defensa del salario y a la manutención de la identidad peronista de la clase obrera, consiguió elevar el salario real en 1956 en medio del programa de estabilización “blanda” del ministro de Hacienda, Eugenio Blanco (Cuadro 1). El fuerte incremento de las horas de huelga, que en 1956 se multiplicaron 35 veces en relación al año anterior (ver Cuadro 2), tuvo momentos sobresalientes como el prolongado paro metalúrgico de enero de 1956.

³ En octubre de 1956, en un mensaje radial incluyó la cuestión gremial como parte del gran desafío del desarrollo nacional basado en la industria, que sería la piedra angular de su eventual gobierno. La industrialización como proyecto nacional que comprendía a todos los sectores de la economía, convocaba a la armonización del capital y del trabajo, de la industria y del campo. También alentaba a las mejoras de la productividad laboral, a través de un incremento tanto de la inversión tecnológica como de la disciplina fabril (Frondizi, 1957). En su última presentación previa a las elecciones (febrero de 1958), pidió el voto de los trabajadores peronistas comprometiéndose a garantizar su participación en la discusión de sus problemas. En un cierto sesgo neo-corporativista, contraponía la democracia económica a la mera democracia política.

Cuadro 1: Evolución del salario real, 1950-1961 (en base a 1970=100)

1950	81,24
1951	76,8
1952	71,52
1953	76,36
1954	83,78
1955	81,79
1956	87,7
1957	84,7
1958	92,63
1959	71,36
1960	72,69
1961	79,83

Fuente: Elaboración propia en base a Becarria y Maurizio, 2022.

Con estos datos, el régimen dudaba sobre el rumbo de la política económica. En enero de 1957 el presidente *de facto*, general Pedro Aramburu promovió un cambio de gabinete en el que Roberto Verrier, un ultraortodoxo, reemplazaba en la cartera económica a Blanco, en una tentativa de una transformación radical del programa de gobierno. Los objetivos propuestos por el nuevo ocupante del Palacio de Hacienda consistían en liberar a la macroeconomía de las regulaciones impuestas por el peronismo; pero con este programa, su horizonte temporal se encontraba en el mediano plazo, lo cual significaba, en la práctica, la suspensión indefinida de las elecciones. Dicho plan encontró una fuerte resistencia tanto dentro del gobierno como fuera. El propio presidente Aramburu acabó por rechazarlo. Verrier fue reemplazado por Adalberto Krieger Vasena que mantuvo el congelamiento de salarios y la restricción crediticia para controlar los precios. El programa de cambio estructural de largo plazo del régimen militar se abandonó en beneficio de una solución de emergencia para llegar a las elecciones. Como muestra, a la finalización del período del gobierno provisional todavía los salarios se mantenían en un alto nivel (Cuadro 1). Esta situación representaba en esencia un triunfo del sindicalismo que había pasado de la dependencia del Estado peronista al bloqueo desde afuera de las políticas del régimen militar destinadas a desplazarlo (Cavarozzi, 1984, p. 89). Más aun, la situación del sindicalismo se vio reforzada por la convocatoria a elecciones nacionales para febrero de 1958 al permitirles ampliar su margen político de maniobra. El gremialismo terminó de reagruparse en septiembre-octubre de 1957 de acuerdo a sus perfiles políticos: las “62 Organizaciones Peronistas”, los “32 Gremios Democráticos” y los “19 Independientes” entre los que dominaban los comunistas.

Cuadro 2: Jornadas de huelga por conflictos laborales (1955-1962)

1955	144.120	1959	10.078.138
1956	5.167.294	1960	1.661.519
1957	3.390.509	1961	2.050.618
1958	6.245.287	1962	1.282.490

Fuente: Cavarozzi (1979, p. 45).

Las tensiones laborales ponían en riesgo el crecimiento industrial que venía subiendo fuertemente en el trienio 1955-1958, duplicando la tasa del período 1950-1955, con fuerte concentración en la rama metalmecánica (Cuadro 3). El descontrol de la situación fabril incrementaba la desconfianza del capital extranjero a invertir en el país, a pesar de las invitaciones formuladas por el gobierno provisional. Los problemas macroeconómicos se concentraban en la progresiva alza de precios, directamente relacionada con los problemas de balanza de pagos que sufría la economía argentina. Contribuía a ello la insuficiencia de la estructura de energía y transporte. Las inversiones necesarias para romper “el círculo vicioso del subdesarrollo” no eran compatibles con el clima de conflictividad social. La normalización de la actividad industrial era la *conditio sine qua non* para romper el estancamiento en los sectores claves de la energía, el transporte y la industria.

Cuadro 3: Industria Manufacturera. Tasa anual de crecimiento, promedios (1950-1961)

	Nivel General	Alimentos y Bebidas	Químicos	Metalmecánica
1950-55	4,10%	1,30%	6,60%	9,40%
1955-58	8,00%	6,60%	7,90%	13,40%
1950-58	5,60%	3,20%	7,10%	10,90%
1958-61	3,10%	-2,20%	5,60%	10,70%

Fuente: Heymann (1980).

El candidato Frondizi encaminó su mensaje a los principales actores sociales; tras una etapa de ambivalencias pasó abiertamente al campo opositor al gobierno militar, defendiendo tácitamente a la resistencia peronista aunque no sus métodos. Era, según Cavarozzi, el único medio desde el que se podía apelar a las clases populares para mantenerlas integradas al conjunto. El llamado al peronismo no tenía como destinatarios a los peronistas en tanto ciudadanos ya que esto hubiera sido contradictorio con la antinomia democracia/dictadura a la que el frondizismo había adherido (Cavarozzi, 1984, p. 48). Su exhortación estaba más bien dirigida a los trabajadores como integrantes fundamentales del cuerpo social de la Nación. No dejaba afuera a los empresarios, a los que pensaba convencer de que participaran de la nueva etapa de industrialización sustitutiva, con la eventual colaboración de los capitales extranjeros, aunque esto no se mencionaba explícitamente. Por último, no dejaba fuera de su interlocución a los sectores medios. A estos les ofreció esencialmente el impulso a la educación, la ciencia y la técnica, uno de los símbolos de su gobierno.

El triunfo final de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) en las elecciones de febrero de 1958 demostró que su estrategia había sido adecuada para vencer en la compulsa, pero, ¿sería apta para gobernar? Las Fuerzas Armadas no estaban satisfechas con el panorama. Frondizi había sido férreo opositor al gobierno militar y el acuerdo, por entonces tácito, con Perón ponía, para los militares, en duda la legitimidad de un gobierno constitucional que había nacido de su derrocamiento. Más allá de que se admitió la entrega del gobierno, subsistía un clima de desconfianza, tanto de los militares, como de los partidos opositores.

Los trabajadores, por el contrario, guardaban expectativas positivas frente al nuevo gobierno. Habían tenido algunas buenas razones para votar y sostener a Frondizi, con

quien compartían el bagaje ideológico del sindicalismo peronista: nacionalismo económico, industrialismo, alianza de clases, armonía entre capital y trabajo, relevancia del sindicalismo obrero, reconocimiento de su aporte al proceso de producción (James, 2007, p. 130).⁴ Alguna forma de concertación debería implementarse para compartir la responsabilidad con gremios y asociaciones empresarias respecto a las políticas socio-económicas a ser implementadas (Dos Santos, 1987, p. 26). Para esto, las organizaciones corporativas debían tener un funcionamiento orgánico en el que las entidades de conducción pudieran representar y dirigir a sus bases. El elevado nivel de fragmentación gremial, funcional durante la resistencia al régimen libertador en la defensa de sus instituciones y de su salario se transformaba en un obstáculo para los objetivos del nuevo gobierno que debía encontrar la directriz adecuada para incorporar a los trabajadores al proyecto de desarrollo nacional que se proponía implementar.

Política desarrollista, conflictividad social e incertidumbre política

Cuando asumió la presidencia de la República, en mayo de 1958, Frondizi puso en marcha su programa integracionista de normalización de la vida sindical y laboral con aumento de la producción y de la productividad. El nuevo mandatario advertía ya en el mensaje inaugural respecto del peligro de la espiral de aumentos de precios y salarios. Los aumentos salariales no debían ser trasladados a precios. Los representantes de los “sectores interesados”, debían participar de los acuerdos de precios a través de la negociación tripartita. “El movimiento obrero – advertía - es el único árbitro de su propio destino” (Menotti y Olcese, 2007, p. 70). La recuperación de la libertad sindical significaba un ejercicio de la responsabilidad en sus respectivos ámbitos de acción dentro del proceso de desarrollo.

Frondizi remarcaba el rol de los empresarios como protagonistas esenciales del desarrollo económico. No obstante, las manifestaciones de las asociaciones empresarias en relación al gobierno fueron bastante críticas con las medidas gubernamentales (Belini, 2020, p. 113). El retorno a la legalidad de la Confederación General Económica, que estaba afianzada con el componente de algo que podríamos denominar *corporativismo para el desarrollo*, abroqueló al conjunto de asociaciones que habían acompañado la Revolución Libertadora a enrolarse en la ACIEL. Desde sus filas se repetían los cuestionamientos tradicionales del liberalismo a la intervención del Estado en la economía, la influencia sindical y al gasto público inflacionario.

En los primeros meses se habrían de establecer acuerdos con el movimiento sindical basados en el fortalecimiento de las conducciones peronistas para que a su vez apoyaran el programa económico del gobierno (James, 2007, p. 127). El primer encargado de ejecutar esta política fue un joven sindicalista y abogado del gremio del seguro, Alfredo Allende, designado ministro de Trabajo que envió para su sanción parlamentaria la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales. La norma preveía la representación sindical por rama de actividad, anulaba la representación de la minoría y fortalecía a las conducciones gremiales centralizadas. Los empleadores quedaron obligados a retener una cuota de los haberes de los trabajadores, para ser destinadas a las cuentas sindicales, fundamental como fuente de in-

⁴ Si bien esta interpretación ha sido discutida (Yazbek, 2016, p. 60) consideramos que explica el impacto de la desilusión que tuvieron los trabajadores.

gresos para la estructura sindical. Pero si bien Frondizi había declarado que los gremios serían independientes del Estado y los partidos políticos, en la práctica la norma permitía usar el reconocimiento oficial de los gremios y de sus direcciones como un mecanismo de presión sobre las decisiones sindicales. Se intentó reinstaurar, de alguna forma, la tutela estatal de los sindicatos.

Consistente con esta tentativa, el gobierno nacional decretó un 60% de aumento de los salarios privados, aplicados sobre los valores de convenio de 1956, con el descuento de las mejoras parciales otorgadas en forma privada. Esta fue una decisión que generó un fuerte rechazo del empresariado, férreo opositor a los aumentos generales de salarios. La recomposición del salario emergente obedecía a lo que se consideraba una necesidad política; los salarios sólo tenían un retraso menor en relación a su nivel de 1956 (Cuadro 1). El *establishment* cuestionaba el aumento por sus efectos inflacionarios, pero también por su sentido general. Por ejemplo, *Economic Survey*, guardián de la ortodoxia económica, conjeturaba que esta decisión simbolizaba la temida vuelta de la economía peronista, un concepto que no se avenía a la práctica puesta en marcha en esos años de aumentos por las convenciones colectivas de trabajo (“Análisis del discurso...”, 1958).

Esta discutible lectura no podía ocultar que había reminiscencias peronistas en la adopción de mecanismos heterodoxos de estabilización de la economía; en verdad el frondizismo presumía que la expansión monetaria sería finalmente compensada con el futuro aumento de la producción, alcanzada por la masiva inversión esperada.

De momento, dada la imposibilidad de hacer una concertación de precios y salarios en regla como había sucedido en febrero de 1952, se adoptaban las medidas de control de precios y de combate a la especulación como parte de la política de Frente Nacional. Hubo congelamiento de alquileres y se implantaron precios máximos sobre productos alimenticios como azúcar, leche, manteca, pan y harina. En el Congreso Nacional se conformó una Comisión Investigadora del Agio y la Carestía de la Vida dirigida por el diputado ucrista Oscar López Serrot, integrante de las corrientes más reformistas del partido de gobierno. Esta comisión actuaba directamente a través de operativos policiales en muchos casos sobre pequeños comercios como los puesteros de un mercado, recibiendo la crítica de la Confederación General Económica, como representante de las pequeñas y medianas empresas (“Operativo policial...”, 1959). Dentro de este sesgo más heterodoxo, se pretendía utilizar la distribución del crédito de los bancos estatales para proveer la mejora de la distribución regional de los emprendimientos. Sea como fuere, la reconstrucción económica se haría en base a la plena ocupación y con un mínimo de sacrificios de los trabajadores, lo que implicaba un esfuerzo para los empresarios.

En relación al movimiento sindical, la conducta del gobierno frondizista favorable a los dirigentes peronistas encuadrados dentro de las 62 Organizaciones agudizó los enfrentamientos con los otros nucleamientos sindicales, 32 Gremios Democráticos,⁵ los independientes y especialmente los comunistas que fueron considerados los principales enemigos en el campo gremial, no solo por su concepción de la lucha de clases sino también por su

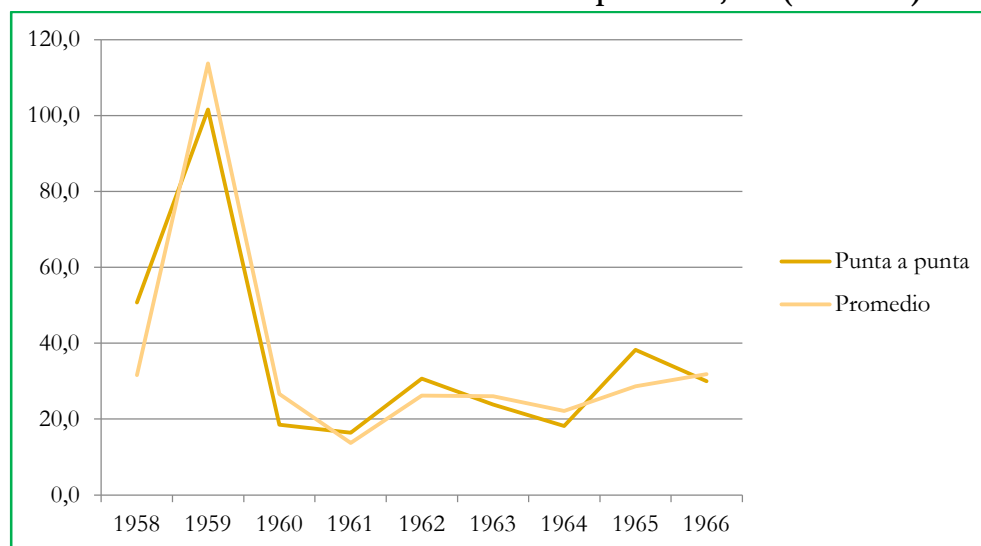
⁵ En 1958 se haría inicio a los conflictos gremiales ferroviarios, por parte de dirigentes identificados con los 32 Gremios Democráticos.

identificación con los intereses soviéticos que se aparecían enfrentados a la apertura a los capitales de las multinacionales norteamericanas y europeo-occidentales.⁶

La convocatoria a la “batalla del petróleo”, iniciada en junio con la firma de los contratos petroleros con empresas mayoritariamente norteamericanas hacía de este conflicto gremial un aspecto más de la Guerra Fría. Esta arista externa hacía más imperativo el rechazo a los cuestionamientos obreros a su política económica favorable al desarrollo y de apertura al capital extranjero, más allá de la decisión de normalizar los sindicatos. Por lo tanto, cuando el sindicato petrolero de Mendoza declaró una huelga en rechazo a los contratos, el gobierno reaccionó de forma contundente. Consideró el hecho como una amenaza frontal a la institucionalidad y a la paz social, una valoración exagerada influida por las intrigas de los cuarteles militares, donde se pedía mano dura con los sindicatos. Para complicar la situación, las 62 Organizaciones, que habían apoyado con reticencia la firma de los contratos, declararon ahora un paro general en apoyo a los obreros mendocinos. El gobierno declaró el Estado de Sitio por lo que el conflicto derivó en una grave crisis de gabinete del gobierno con la salida del secretario de Relaciones Económicas y Sociales de la Presidencia, Rogelio Frigerio, quien había intentado negociar con el sindicato nacional de petroleros dentro de la lógica integracionista. La crisis se agravó poco más tarde, cuando, en medio de los rumores de complicidad con los conspiradores militares, el vicepresidente Alejandro Gómez, opuesto a la orientación de las políticas del gobierno, acabó por renunciar.

Estos devaneos sucedían en medio de una brusca aceleración del proceso inflacionario, un fogonazo (Gráfico 1) que afectó los ingresos fijos y disparó la tensión gremial. En contrapartida, la situación facilitó el acercamiento del gobierno a los empresarios cuando se agrietaba la convivencia entre gobierno y sindicatos. Ya en ese momento, estaban encaminadas las negociaciones del ministro de Economía Emilio Donato del Carril con el FMI que culminaron con el lanzamiento del Plan de Estabilización a finales de 1958, acordado con el Fondo. Este *stand by* incluía el recetario ortodoxo habitual en la época, cuya componente central fue la unificación del mercado de cambios con la consiguiente devaluación. La combinación del congelamiento salarial, aumento de precios y apreciación cambiaria provocó una aguda contracción económica y una caída de los salarios reales. Las 62 Organizaciones, acompañados aquí por los 32 Gremios Democráticos y los ex-19 Independientes, se opusieron abiertamente y pretendieron modificar la dirección que adoptaba el gobierno en su política económica, algo que éste último no estaba dispuesto a aceptar.

⁶ Existieron contactos iniciales, a través de la misión encabezada por José Liceaga enviada a Moscú para compra de equipos de exploración petrolera. Sin embargo, los acuerdos no llegaron a concretarse.

Gráfico 1: Tasas anuales de inflación en promedio, IPC (1958-1966)

Fuente: Jáuregui y Keifman (2021).

La adopción del plan reconocía que el gobierno había cambiado la política nacional popular propuesta en mayo de 1958, al propiciar una notable disminución del salario y del consumo por una política de austeridad fiscal y de equilibrio externo. El gobierno argumentaba que el plan estaba destinado a estabilizar la economía mientras continuaba en marcha el programa de desarrollo. Tal como había proclamado Perón en 1952, había que producir más de lo que se consumía. En un par de años, el desacople entre bienes y medios se resolvería con el ajuste de los precios relativos. “El nivel de vida de los argentinos —decía el presidente en su discurso de presentación del Plan de Estabilización— ha de descender en los próximos 24 meses, por la sencilla razón de que no podremos seguir consumiendo más de lo que producimos” (Frondizi, 1958). En suma, les proponía a los trabajadores que aceptaran una disminución de sus salarios por dos años hasta que el programa paralelo de desarrollo diera sus frutos. “Si es necesario le sacaremos la carne de la boca al pueblo para darle la posibilidad de soberanía” (“Correspondencia interna”, 1959). La existencia de organizaciones obreras responsables serviría de garantía decisiva para el establecimiento de un coeficiente de productividad apropiado y para la justa distribución de los beneficios (Frondizi, 1959).

El descenso del consumo sucedió efectivamente, respondiendo al típico fenómeno de la devaluación contractiva (García Heras et al., 2022). La desocupación aumentó, facilitando la reorganización del trabajo en las empresas, en medio de un alza de la inflación, con la gradual eliminación de los controles de precios, que era el residuo del programa heterodoxo original. Pero la propuesta de un retraso salarial consentido (Cavarozzi, 1979, p. 71) a la que aspiraba el gobierno fue rápidamente rechazada por los sindicatos. Esta respuesta se expresó concretamente en un conflicto que no estaba estrictamente ligado al plan de diciembre sino a la política de racionalización del gasto público, lanzada al comienzo del mandato. La privatización del frigorífico nacional Lisandro de la Torre, que pertenecía a la Municipalidad de Buenos Aires, que sería transferida a la Corporación Argentina de Productores de Carne, se originó en un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para su apro-

bación legislativa. Sancionada la ley de privatización de la empresa, los 9000 trabajadores ocuparon la planta y decretaron la huelga, recibiendo el apoyo de otros gremios, de la población y los comerciantes del barrio de Mataderos.⁷ Las fuerzas militares tomaron la planta por la fuerza, por lo que la agitación se extendió a otras ciudades, como La Plata, Berisso y Ensenada, con fuerte presencia de frigoríficos. Las 62 Organizaciones decretaron en solidaridad un paro por tiempo indeterminado. El gobierno respondió con la intervención de los principales sindicatos peronistas (la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación Obrera Textil, las federaciones de Sanidad y de la Carne) y deteniendo a sus dirigentes. Todo sucedía no casualmente mientras Frondizi realizaba una visita oficial a Estados Unidos, con el fin de dificultar la apertura a los capitales de ese origen. El gobierno ordenó la movilización militar, se detuvo a muchos sindicalistas y se aplicó el plan CONINTES. Se despidieron miles de obreros. Colofón, el movimiento no pudo sostenerse, el paro se levantó y el gobierno ganó la pulseada. Este fracaso puso en evidencia que el sindicalismo peronista había perdido la capacidad, demostrada entre 1955 y 1958, de frenar políticas estabilizadoras sustentadas en la reducción del salario real (Cavarozzi, 1979, p. 37). La intervención a los sindicatos y la persecución a sus dirigentes había colocado a los gremios a la defensiva en lo laboral, aunque seguían contando con centralidad política.⁸ Al mismo tiempo, en medio de un clima de intolerancia, se sucedieron varios atentados terroristas, que afectaron a funcionarios del gobierno como el propio Frigerio.

A pesar de estos inconvenientes, las conducciones peronistas de los principales gremios aprovecharon la coyuntura para incrementar su poder en detrimento de los organismos de base, proceso que se inició con la puesta en vigor de la Ley 14.455 (Fontana, 2005). Por su lado, en relación a los sindicatos, el gobierno debía tomar nota de las demandas y presiones de otros actores, especialmente los militares, que se consideraban garantes del legado antiperonista de la Revolución Libertadora.

La estabilización económica y gremial

Los meses posteriores al anuncio del Plan de Estabilización vislumbraron la acentuación de la crisis política iniciada en noviembre. La resistencia sindical a las medidas económicas envalentonó a manifestaciones enconadas de los partidos opositores junto a la agitación militar en ascenso y el movimiento huelguístico.

Frente a las huelgas, el Ministerio de Trabajo, bajo el mando del sucesor de Allende, David Bléjer hizo uso de la doble vía de neutralización, el ataque a los sindicatos y la aceptación de las cesantías decretadas por los empresarios. Al mismo tiempo, se adoptó como criterio la no autorización de los aumentos salariales que no estuvieran relacionados con el alza de la productividad, un objetivo que el empresariado venía procurando desde la década peronista (Jáuregui, 2016, p. 32). El gobierno continuaba su ofensiva para lograr la disciplina gremial. Mientras aplazaba la entrega de la Confederación General del Trabajo al sindicalismo, continuaba la persecución de sus dirigentes. Pero este sendero transcurría sin el sesgo ni el discurso antiperonista anterior, con funcionarios del Ministerio dispuestos a la

⁷ El gobierno municipal y los ediles de la UCRI manifestaron también inquietud sobre el tema.

⁸ Eran frecuentes los contactos de los dirigentes sindicales, aún los más autónomos, con Perón. Por ejemplo, en enero de 1959 Andrés Framini y Eleuterio Cardoso viajaron a Santo Domingo para conversar con el líder sobre el plan económico ("Dirigentes sindicales...", 1959).

revisión de las medidas, por medio de la negociación. La combinación de estabilización, recesión, represión selectiva y negociación contribuyó a una intensa caída del salario del 23% en 1959 (Cuadro 1).

Todo ello no fue gratuito para el prestigio gubernamental que, entre los trabajadores, había disminuido en forma ostensible. La política laboral provocaba dificultades en la Organización Internacional del Trabajo, en donde tallaba fuerte la Confederación Internacional Obrera de Sindicatos Libres a la que adherían los 32 Gremios Democráticos. Allí se impugnaba la política sindical argentina, algo que afectaba negativamente el prestigio internacional del país.

En junio de 1959 un hecho vino a alterar la ya complicada marcha de la política económica y social. El expresidente Perón dio a conocer el supuesto acuerdo firmado con Frigerio, por el que había mandado a votar a Frondizi en las elecciones de 1958. La noticia tuvo un impacto profundo, agravando el malestar militar y la inestabilidad política. La carta inesperada de designar a Álvaro Alsogaray en el ministerio de Economía fue una huida hacia adelante para responder a las presiones militares, pero también a las del gran empresariado cercano a ACIEL. Su nombramiento garantizaba que la política económica no estaría al servicio de los intereses políticos presidenciales y de sus objetivos integracionistas. Alsogaray exigió agregar a su cargo la cartera de trabajo lo que le permitía continuar las políticas de “doble vía” del ministro Bléjer. Ello supuestamente facilitaría la convergencia entre la política económica y la gremial. El nuevo ministro, que tenía aspiraciones políticas evidentes, carecía de los escrúpulos de los frondizistas en relación al sindicalismo. Ayudaba a sus propósitos la recesión corta pero profunda del primer semestre de 1959, que debilitó de momento la posición combativa del sindicalismo, facilitando la “razonabilidad” de sus dirigentes.

El Ministerio de Trabajo fue sometido a una re-estructuración, al comando del subsecretario Galileo Puente, quien estaba a cargo de la cartera.⁹ La figura más destacada del staff laboral era en verdad Rubens San Sebastián, subdirector de Relaciones del Trabajo, que pasó a manejarse con poder de decisión en las disputas, tanto en torno al trabajo como a la vida interna de los gremios. La nueva estructura del ministerio tuvo como tarea central la normalización del funcionamiento de las convenciones paritarias, que pasaron a funcionar con la premisa de que los salarios deberían ajustarse a la evolución del nivel de productividad. De lo contrario no serían aprobados los convenios firmados. Este mecanismo de retraso salarial consentido resultaba mucho más ejecutivo que los aumentos salariales decretados por el gobierno por debajo de la tasa de inflación y que era rechazado por los trabajadores. La gestión de Alsogaray quiso sumar a su favor la reglamentación del derecho de huelga, pero la iniciativa fue dejada de lado por los funcionarios que respondían al presidente. La estabilización y el desarrollo pudieron contar de esta forma con un consentimiento sindical larvado a cambio de la aceptación de su preminencia política y del manejo de las entidades sindicales.

Estas mudanzas no estaban divorciadas de las modificaciones en las posiciones internas del sindicalismo. La división entre peronistas, “democráticos” y comunistas, anterior

⁹ Este funcionario, quien ejercería las funciones efectivas de ministro, consideraba que los empresarios habían perdido el comando de las fábricas, ante el dominio de las comisiones internas, lo cual constituía un problema insalvable para los propósitos ostensibles del proyecto “desarrollista”.

a 1958, dejó paso a un mapa más complejo en el que aparecían el líder metalúrgico Augusto Vandor, quien encabezaba el sindicato industrial más poderoso del país, los “integracionistas” de Eleuterio Cardoso, del gremio de la carne (cercano al gobierno), el peronismo duro de Amado Olmos de Sanidad y los independientes, con la Unión Ferroviaria a la cabeza.

La lógica pragmática del dominante vandorismo triunfó en su designio de reorganización sindical interna, en detrimento de la influencia de los comités fabriles y de la democracia interna. Los convenios colectivos de los años 1960 y 1961 otorgaron una mayor presencia de los organismos de conducción en las fábricas, de resultas de lo cual declinaron las atribuciones de las comisiones internas, un objetivo que las empresas venían intentando poner en marcha desde hacía tiempo (James, 2007, p. 133). La cúpula sindical peronista obtuvo, a cambio del control de las comisiones internas y la aceptación de la racionalización, beneficios para sus afiliados como subsidios por maternidad, asignaciones familiares, licencias por casamiento y asignaciones por antigüedad. Ello les permitió ganar volumen político (James, 1990, p. 48). A medida que el plan iba avanzando, el sindicalismo engrosaba su rol de jugador “responsable”.

El mejoramiento de la situación económica y la tregua política alcanzada con los militares a fines de 1960 animó a Frondizi a designar en la conducción del Ministerio de Trabajo al dirigente intransigente, Guillermo Acuña Anzorena. El nombramiento miraba a fortificar el sector que respondía directamente al presidente frente al equipo más ligado al ministro de Economía y ratificaba dicha posición como estratégica en el sistema de poder del frondizismo. El nuevo funcionario no abandonaría la política de aplicación del plan CONINTES; por el decreto 12806 emitió órdenes de captura para dirigentes bancarios, del seguro, azucareros y de la construcción. Incluso el petrolero Pedro Gomis, que había actuado en forma ambivalente frente al conflicto de la seccional de Mendoza en 1958 y que había triunfado en las elecciones del Sindicato Unidos de Petroleros Estatales, fue detenido.

El juego imposible de la integración socio-económica sin integración política

A medida que los resultados del plan de estabilización fueron emergiendo, el nivel de conflictividad descendió, aunque sin alcanzar la soñada “paz social”.¹⁰ Eso quedó reflejado en el mensaje inaugural de las sesiones del Congreso Nacional de 1961, cuando Frondizi señaló que: “No se puede gobernar eficazmente cuando incesantemente hay que prevenir la conspiración o el motín, combatir el sabotaje y el terrorismo de elementos criminales o rechazar la impaciencia de quienes, en procura de una supuesta perfección, quieren destruir lo posible” (Menotti y Olcese, 2008, p. 129).

Estas palabras, dichas en tono de reproche a un sindicalismo que continuaba censurando las políticas oficiales, reflejaban un fenómeno que había perdido la intensidad de los años previos. Según el Cuadro 2, 1959 había representado el punto culminante del ciclo huelguístico a partir del cual comenzaría a decrecer. En 1960 las horas perdidas por huelgas cayó fuertemente para recuperarse parcialmente en 1961 y tener una caída abrupta en 1962 ya en el gobierno de Guido y en medio de una profundización de la crisis económica.

¹⁰ Szusterman (1998, p. 237) presenta el problema de las relaciones con empresarios y trabajadores como destinado a generar una “paz social” solo relacionada con la inversión. Dicha paz no habría sido alcanzada a raíz de los zigzagueos en que se vio sumida la política gubernamental.

Más allá de la intensidad de los conflictos, las políticas gubernamentales guardaban relación con el ámbito de la pertenencia gremial. En la esfera privada se privilegiaba la normalización del trabajo, apelando a mecanismos alternativos de negociación y de represión, pero reconociendo la importancia del interlocutor en relación a la actividad productiva. Ya en el ámbito público, la conducta del gobierno, si bien consideraba la continuidad de la actividad, estaba fuertemente condicionada por la meta de “racionalización” del gasto. Este fue uno de los componentes del conflicto ya mencionado por la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre a comienzos de 1959.

La presión militar era un condicionante directo de las posibilidades de acuerdo gubernamental con los sindicalistas, aunque en algunos casos aquella asumía una expresión más directa, como sucedía con el gremio de los portuarios, cuya actividad era monitoreada de cerca por la Marina de Guerra y la Prefectura.

Un asunto singular lo constituyó el sindicalismo del sector público que por su naturaleza generaba no pocos roces al interior del gobierno.¹¹ Así, las discusiones con el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal provocaron controversias entre funcionarios por sus efectos sobre inversiones y precios. El acuerdo firmado por la empresa pública Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, y Agua y Energía Eléctrica, que había convenido en mayo de 1960 un aumento del 25 % a lo largo de un año y medio, fue rechazado por el subsecretario de Energía y Combustible, el ingeniero Salvador San Martín con el argumento de que dicho aumento derivaría en una suba de tarifas de energía para los consumidores. Con consecuencia de este desacuerdo, San Martín, que estaba duramente enfrentado a la conducción sindical encabezada por Juan José Taccone, renunció a su cargo.¹²

Más grave sería la cuestión ferroviaria, en un sector estatal de gran significación, afectado por un crónico déficit de explotación. Por una parte, se trataba de un gremio que había jugado y pretendía continuar jugando un papel en la vida gremial, en cuya conducción convergían radicales del pueblo como Antonio Scipione, socialistas y comunistas, pero también peronistas y que venía sosteniendo una larga serie de conflictos desde la estatización de los ferrocarriles en 1947. Desde los años cuarenta, el *holding* de empresas del riel venía arrastrando un déficit de explotación que obligaba a una asistencia del Tesoro que el Plan de Estabilización venía a reducir. Decidido a continuar con su política de racionalización y de baja del déficit fiscal, el gobierno avanzó en la reestructuración del sistema ferroviario, según el Plan Larkin a tono con las demandas del Banco Mundial para el financiamiento de las obras de infraestructura. En las discusiones paritarias para el año 1961, el gobierno y los sindicatos ferroviarios no llegaron a un acuerdo sobre las nuevas condiciones de trabajo y las futuras escalas salariales en el sector para el año 1961, que eran parte del plan de reordenamiento. Este preveía una reducción del 35% de los trabajadores y determinó que los aumentos salariales estuviesen vinculados a la baja de los costos o a un aumento de los ingresos de las empresas. Los gremios del sector se lanzaron a una huelga de cuarenta y cinco días que descalabró el transporte a escala nacional. A despecho de las dife-

¹¹ El Banco Central entendía que un sector del gobierno estimulaba los conflictos laborales como una forma de posicionarse en la lucha interna Banco Central de la República Argentina (*Memoria Anual*, 1961, citada en García Heras et al., 2022).

¹² Tal como se refleja en la prensa de la época (“Luz y Fuerza le contesta...”, 1960; “Luz y Fuerza. Firmóse...”, 1960).

rencias, la Confederación General del Trabajo apoyó la huelga; lo mismo hicieron los partidos del arco opositor. Viendo complicada la continuidad de su plan de racionalización ferroviaria, el gobierno suspendió su proyecto y aceptó en gran medida las demandas de los ferroviarios. Este resultado tuvo un impacto negativo sobre la gobernabilidad y dejó el camino expedito a la conspiración militar.

El acercamiento a las elecciones de renovación de gobernadores y diputados nacionales y provinciales se presentó como una oportunidad para demostrar la sustentabilidad de la gestión. Hasta el momento el gobierno había sorteado exitosamente las anteriores compulsas electorales, gracias a la abstención del sindicalismo, que tácitamente lo había beneficiado. A medida que avanzaba el período presidencial se hacía imperioso que el gobierno optara entre continuar con la política de integración que se había insinuado en los primeros meses de gobierno o se transformara en un partido antiperonista. La integración requería convencer al peronismo de la imposibilidad de acceder al poder; a cambio se le garantizaba el control sindical y cierta presencia en la escena política y partidaria. La segunda opción implicaba una acentuación del discurso antiperonista. En las elecciones de 1960 y 1961, se produjo una suerte de situación intermedia gracias a la que los sindicalistas se abstuvieron de participar en las elecciones, favoreciendo indirectamente a los candidatos ucristas.

Pero las elecciones de marzo 1962 la situación cambió. Se presentó como una oportunidad para el sindicalismo de mostrar su preminencia sobre el sector político del justicialismo. En términos más generales, la expresión política de la clase obrera peronista estaría directamente vinculada al movimiento sindical. Vandor sería el encargado de la organización de la campaña electoral del candidato Andrés Framini, que representaba a los sectores sindicales duros peronistas. El gobierno debió elegir la opción de encarnar al electorado antiperonista, por el que debía competir con la otra rama del radicalismo, la Unión Cívica Radical del Pueblo.

La victoria final del justicialismo en algunas de las provincias, sobre todo en la de Buenos Aires fue posible gracias a la infraestructura y los recursos económicos provistos por la Unión Obrera Metalúrgica y otros sindicatos peronistas. Paradojalmente, el episodio que condujo a la crisis final del gobierno del presidente Frondizi fue originado en uno de los sectores en los que este podía haber presumido de haber logrado sus propósitos de normalización con que había iniciado su mandato.

A modo de conclusión

En este trabajo, partimos de algunas constataciones básicas. El período de la Revolución Libertadora es fundamental para entender la gestión presidencial de Frondizi. La Argentina de 1958 estaba atravesada por una profunda conflictividad laboral que era imprescindible superar para continuar el camino del crecimiento, especialmente industrial, que se había evidenciado en los años previos.

Frondizi era, en mayo de 1958 cuando alcanzó la Presidencia de la República, parte de la tradición nacional popular. Esta raigambre, compartida por el radicalismo y el peronismo, compatible con la defensa de las instituciones de la democracia, se involucraba abiertamente en la protección de los trabajadores y del empresariado nacional. A esos tópicos, Frondizi le agregó el desarrollo económico.

La escena de conflicto que la “resistencia peronista” y la “Libertadora” habían dejado a su llegada, requería una resolución urgente que tomara en cuenta a los trabajadores. Para ello era imprescindible dar un giro sustancial a las relaciones con los sindicatos, facilitando su legalización con la participación en la dirección de los dirigentes más representativos y reconociendo su estructura previa, sin abandonar la injerencia estatal al modo del peronismo. Desde la perspectiva de Frondizi, este reconocimiento no podía acometerse sin la paralela admisión de que la cultura laboral peronista no era compatible con la implementación de un programa de desarrollo. En este sentido, los frondizistas consideraban que los intereses históricos de la clase obrera chocaban contra sus intereses inmediatos, al menos como los trabajadores los concebían. Esta impresión no se deduce de las primeras medidas adoptadas en el poder, como el aumento salarial de emergencia; este fue más bien fruto de una necesidad política que económica. Pronto en las entrañas del poder se comenzaría a señalar que los salarios en la serie histórica estaban sobrevaluados en relación a la capacidad productiva y que, por lo tanto, en principio sería aceptable un retraso consentido de su valor, en el que el consentimiento podría ser obtenido de distintas formas, incluso “a palos”. La caída del salario real provocada por el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 1958 era un sinceramiento relativo a la productividad media de la economía que tendería a crecer conforme se fuera aplicando la política de desarrollo.

El vínculo gubernamental con el gremialismo estuvo atravesado entonces por contradicciones inherentes a la propuesta frondizista que nunca abandonó completamente su origen nacional popular en el reconocimiento del aporte del sindicalismo peronista a la economía y a la política nacionales, pero que tenía en la inversión de capitales, extranjeros y nacionales, su meta estratégica. El costo laboral decidía la inversión, pero también la disciplina fabril y la seguridad jurídica. Así, los dirigentes sindicales que fueron perseguidos y encarcelados, no recibieron ese trato por ser peronistas sino por ser desestabilizadores del proyecto económico, que en última instancia los favorecería. Las políticas de seducción al sindicalismo peronista fueron acompañadas de persecución cuando los representantes de los trabajadores acudían a medidas de fuerza para recusar las políticas del gobierno.

Finalmente quedó latiendo una paradoja. Por una parte, la tentativa de negociación tripartita y de concertación proyectada inicialmente no se pudo mantener como fuera concebida por Frondizi; no obstante, la reorganización del aparato sindical y la implementación de la negociación laboral contribuyeron a generar mecanismos de disciplina fabril afines con las metas desarrollistas del programa económico. Más allá de su resultado en el mandato interrumpido en 1962, este modelo de articulación estuvo en la base de ciclo de crecimiento económico argentino del período 1963-1974.

Referencias

- Acta con Luz y Fuerza (1961 septiembre 26). *La Nación*, p. 1.
- Análisis del discurso del ministro de Economía. (1958, julio 8). *Economic Survey*, pp.1-2.
- Basualdo V. (2010). Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina. Una mirada de largo plazo, desde sus orígenes hasta la actualidad. En Socolovsk, Y. y Arceo, N. (Coords.). *Desarrollo económico, clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina contemporánea*, IEC-CONADU.

- Beccaria L. y Maurizio R. (2022). *The long-run dynamics of wages and inequality in a country with very high macroeconomic instability: the "Argentine case", 1940-2017*, 2022, mimeo.
- Belini C. (2020) El empresariado industrial durante el ascenso y la crisis del desarrollismo (1955-1963)" En *Estado y empresarios en la Argentina. Política y economía 1955-2001*, Belini, C. (Comp), Lenguaje Claro.
- Cavarozzi M. (1979). *Consolidación del sindicalismo peronista y emergencia de la fórmula política argentina durante el gobierno frondizista*. CEDES.
- Cavarozzi M. (1984). *Sindicatos y política en Argentina*. CEDES.
- Correspondencia interna. (1958). [Nota sin firma]. Caja 03.4.1, Colección Archivos Particulares, Grupo de Estudios Económicos, Archivo Frondizi/CEN, Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
- Dirigentes sindicales visitan a Perón. (1959, enero 12). *Correo de la Tarde*, p. 3.
- Dos Santos, M. (Comp.). *La concertación político-social y democratización*, Buenos Aires, CLACSO, 1987.
- Luz y Fuerza le contesta al Ingeniero San Martín (1960, octubre 19). *El Mundo*, pp. 3-4
- Fontana J. (2005). *El modelo del movimiento obrero en el modelo industrialista. La renovación frustrada*. SEDICI.
- Frondizi A. (1958). *Programa de Estabilización de la Economía Argentina*. Presidencia de la Nación.
- Frondizi Arturo (1959). *Trabajadores y empresarios frente al programa de estabilización*. Presidencia de la Nación.
- García Heras, R., Heymann, D., y Montero, G. (2022). Episodio cíclico y cambio estructural. El Plan de Estabilización y Desarrollo, 1958-1962. En Gerchunoff P., Heymann, D., y Jáuregui. A. (Comps.). *Medio siglo entre tormentas: fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina (1948-2002)*. EUDEBA.
- Heymann, D. (1980). Fluctuaciones de la industria manufacturera argentina, 1950-1978. *Cuadernos de la CEPAL*, 34.
- James, D. (1990). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*, Sudamericana.
- James, D. (2007). Sindicatos, burócratas y movilización. En James D. (Comp.). *Violencia, proscripción y autoritarismo 1955-1976*. Sudamericana.
- Jáuregui, A. (2016). El desarrollismo y los cambios en el mundo del trabajo. En Cerra A., Jáuregui A., y Yazbek S. (Comps.). *Génesis y construcción del desarrollismo argentino*. Biblos.
- Jáuregui, A. y Keifman S. (2021). 1962-1966: Crisis y desarrollo bajo control pretoriano. *Documento de Trabajo IIEP 58*, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
- Luz y Fuerza. Firmóse anoche el convenio (1960 noviembre 19). *Clarín*, p 11.
- Menotti, E., y Olcese H. (Coords.) (2008). *Arturo Frondizi. Su proyecto de integración y desarrollo nacional*. Editorial Claridad.
- O'Donnell, G. (1982). *El estado burocrático autoritario*, Editorial de Belgrano.
- Operativo policial contra comerciantes. (1959, enero 5). *Noticias Gráficas*. p. 7.
- Sikkink, K. (2009). *El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: de Frondizi a Kubistchek*, Siglo XXI.

- Smulovitz, C. (1988). *Oposición y gobierno. Los años de Frondizi*. Centro Editor de América Latina.
- Szusterman, C. (1998). *Frondizi. La política del desconcierto*. Emecé.
- Yazbek, S. (2016). El sindicalismo petrolero frente a los contratos de Frondizi: una interpretación alternativa. En Cerra A., Jáuregui A., y Yazbek S. (Comps.). *Génesis y construcción del desarrollismo argentino*. Biblos.